

Introducción

1. *Francia, noviembre de 2000.* Una decisión de la Corte de Casación abre una lacerante brecha en la jurisprudencia francesa, al dejar sin efecto dos fallos de segunda instancia, contrarios a su vez a otras tantas sentencias dictadas en instancias previas. La Corte reconoce el derecho de un niño llamado Nicolas Perruche, afectado de gravísimas lesiones congénitas, a demandar al médico que no había efectuado el diagnóstico correcto de rubeola a su madre embarazada, impidiéndole así abortar conforme a su expresa voluntad. Lo que en este caso aparece como objeto de controversia, no resoluble en el plano jurídico, es la atribución al pequeño Nicolas del derecho a *no nacer*. Lo que está en discusión no es el error, comprobado, del laboratorio médico, sino el carácter de sujeto de quien le entabla litigio. ¿Cómo puede un individuo actuar jurídicamente contra la única circunstancia —la de su propio nacimiento— que le brinda subjetividad jurídica? La dificultad es a la vez lógica y ontológica. Ya es problemático que un ser pueda invocar su propio derecho a no ser, pero más difícil aún es pensar en un no ser, precisamente quien aún no ha nacido, que reclama su derecho a permanecer en esa condición, vale decir, a no entrar en la esfera del ser. Lo que parece indecible conforme a ley es la relación entre realidad biológica y personalidad jurídica, entre vida natural y forma de vida. Es verdad que, al nacer en esas condiciones, el niño sufrió un daño. ¿Pero quién, si no él mismo, habría podido decidir evitarlo, eliminando anticipadamente su propio ser sujeto de vida,

su propia vida de sujeto? No sólo ello. Dado que quien está en condiciones de obstaculizar un derecho subjetivo tiene la obligación de abstenerse de hacerlo, esto implica que la madre se habría visto forzada a abortar, con prescindencia de su libre elección. El derecho del feto a no nacer configuraría, en suma, un deber preventivo, de quien lo ha concebido, de suprimirlo, instaurando así una cesura eugenésica, legalmente reconocida, entre una vida que se considera válida y otra, como se dijo en la Alemania nazi, «indigna de ser vivida».

Afganistán, noviembre de 2001. Dos meses después del ataque terrorista del 11 de septiembre, en los cielos de Afganistán se perfila una nueva forma de guerra «humanitaria». El adjetivo no se refiere, en este caso, a la intención del conflicto —como en Bosnia y en Kosovo, donde se pretendía defender a pueblos enteros de la amenaza de un genocidio étnico—, sino a su instrumento privilegiado: los bombardeos. Así, sobre el mismo territorio y al mismo tiempo, junto a bombas de alto poder destructivo se arrojan también víveres y medicinas. No debe perderse de vista el umbral que de este modo se atraviesa. El problema no reside únicamente en la dudosa legitimidad jurídica de guerras que, en nombre de derechos universales, se ajustan a la decisión arbitraria, o interesada, de quien tiene la fuerza para imponerlas y comandarlas; tampoco en la frecuente divergencia entre objetivos propuestos y resultados obtenidos. El oxímoron más punzante del bombardeo humanitario reside, antes bien, en la manifiesta superposición entre declarada defensa de la vida y efectiva producción de muerte. Ya las guerras del siglo XX nos habían acostumbrado a la inversión de la proporción entre víctimas militares —que antes superaban con mucho a las demás— y víctimas civiles, cuyo número es hoy ampliamente su-

perior al de las primeras. Asimismo, las persecuciones raciales se basaron desde siempre en el presupuesto de que la muerte de unos refuerza la vida de los otros. Pero, justamente por ello, entre muerte y vida —entre vida que se debe destruir y vida que se debe salvar— persiste, e incluso se profundiza, el surco de una clara división. Este deslinde es el que tiende a borrarse en la lógica de los bombardeos destinados a matar y proteger a las mismas personas. La raíz de esta indistinción no ha de buscarse, como se suele hacer, en un cambio estructural de la guerra, sino más bien en la transformación, mucho más radical, de la idea subyacente de *humanitas*. Esta, considerada durante siglos como aquello que sitúa a los hombres por encima de la simple vida común a las otras especies, y cargada además, precisamente por ello, de valor político, no deja de adherirse cada vez más a su propia materia biológica. Pero, una vez consustanciada con su pura sustancia vital, esto es, apartada de toda forma jurídico-política, la humanidad del hombre queda necesariamente expuesta a aquello que puede a un tiempo salvarla y aniquilarla.

Rusia, octubre de 2002. Grupos especiales de la policía del Estado irrumpen en el Teatro Dubrovka de Moscú, donde un comando checheno tiene como rehenes a casi mil personas, y provocan, con un gas paralizante de efectos letales, la muerte de 128 rehenes y de casi todos los terroristas. El episodio, justificado e incluso tomado como modelo de firmeza por otros gobiernos, marca un paso más en la dirección antes comentada. Aunque en este caso no se utilizó el término «humanitario», no hay diferencia en la lógica subyacente: la muerte de decenas de personas es consecuencia de la voluntad misma de salvar a cuantas sea posible. Sin extendernos sobre otras circunstancias inquietantes, como el uso de gases prohibidos por los

tratados internacionales, o la imposibilidad de contar de antemano con antídotos adecuados con tal de mantener en secreto su naturaleza, detengámonos en el punto que nos interesa: la muerte de los rehenes no fue un efecto indirecto y accidental de la acción de las fuerzas del orden, como puede suceder en estos casos. No fueron los chechenos, sorprendidos por el asalto de los policías, sino los propios policías quienes eliminaron a los rehenes sin más. Suele hablarse de especularidad entre los métodos de los terroristas y los de quienes los enfrentan. Ello puede ser explicable y, dentro de ciertos límites, hasta inevitable. Pero tal vez nunca se vio que agentes gubernativos cuyo cometido era salvar de una muerte posible a los rehenes, llevaran a cabo ellos mismos la matanza con que los terroristas se limitaban a amenazar. Varios factores —el empeño por desalentar esta clase de atentados, el mensaje a los chechenos de que su batalla está perdida sin esperanzas, el despliegue de un poder soberano en evidente crisis— incidieron en la decisión del presidente ruso. No obstante, hay algo más, algo que constituye su tácito presupuesto. El *blitz* en el Teatro Dubrovska no marca la retirada de la política ante la fuerza al desnudo, como también se dijo. Tampoco puede reducirse al desvelamiento del vínculo originario entre política y mal. Es la expresión extrema que la política puede asumir cuando debe afrontar sin mediaciones la cuestión de la supervivencia de seres humanos suspendidos entre la vida y la muerte. Para mantenerlos con vida a toda costa, incluso puede tomar la decisión de precipitar su muerte.

China, febrero de 2003. La prensa occidental divulga la noticia, rigurosamente mantenida en secreto por el gobierno chino, de que tan sólo en la provincia de Henan hay más de un millón y medio de seropositivos, con tasas que en algunas localidades, como Don-

ghu, alcanzan al ochenta por ciento de la población. A diferencia de otros países del Tercer Mundo, el contagio no tiene una causa natural o sociocultural, sino lisa y llanamente económico-política. No se origina en relaciones sexuales sin protección, ni en el consumo antihigiénico de drogas, sino en la venta masiva de sangre, estimulada y administrada directamente por el gobierno central. La sangre, extraída a campesinos necesitados de dinero, se centrifuga en grandes contenedores que separan el plasma de los glóbulos rojos. Mientras el plasma es enviado a adquirentes ricos, los glóbulos rojos se inyectan nuevamente a los donantes para evitarles la anemia e impulsarlos a repetir continuamente la operación. Pero basta con que uno solo de ellos esté infectado para contagiar toda la partida de sangre sin plasma que contienen los grandes autoclaves. De este modo, poblados enteros se han llenado de seropositivos, destinados casi siempre a morir por falta de medicamentos. Es cierto que precisamente China empezó, poco tiempo atrás, a comercializar fármacos antisida de producción local a bajo costo. Mas no para los campesinos de Henan, ignorados por el gobierno e incluso obligados al silencio para no terminar en la cárcel. Quien reveló la situación, al quedar solo tras la muerte de todos sus allegados, prefirió morir en la cárcel antes que en su cabaña. Basta con desplazar el objetivo hacia otro fenómeno más amplio para darse cuenta de que la selección biológica, en un país que aún se define como comunista, no es sólo de clase, sino también de género. Al menos desde que la política estatal del «hijo único», destinada a impedir el crecimiento demográfico, en conjunción con la técnica de la ecografía, lleva al aborto de gran parte de quienes habrían llegado a ser futuras mujeres. Esto vuelve innecesaria la tradicional usanza campesina de ahogar a las recién nacidas, pero inevitablemente incrementa la desproporción numérica

entre varones y mujeres: se calcula que en no más de veinte años será difícil que los hombres chinos encuentren esposa si no es arrancándola, aún adolescente, a su familia. Tal vez sea esta la razón por la cual, en China, la relación entre los suicidios femeninos y masculinos es de cinco a uno.

Ruanda, abril de 2004. Un informe de la ONU da a conocer que diez mil niños de la misma edad son el fruto biológico de los estupros étnicos cometidos, diez años atrás, durante el genocidio que los hutu consumaron contra los tutsi. Como más tarde en Bosnia y en otras partes del mundo, esta práctica modifica de manera inédita la relación entre vida y muerte conocida en las guerras tradicionales e incluso en aquellas, llamadas asimétricas, libradas contra los terroristas. En ellas, la muerte siempre viene de la vida —hasta *por intermedio* de la vida, como en los ataques suicidas de los kamikazes—, mientras que en el estupro étnico es la vida la que viene de la muerte, de la violencia, del terror de mujeres a quienes se embaraза aún desmayadas por los golpes recibidos o inmovilizadas con un cuchillo sobre la garganta. Es este un ejemplo de eugenesia «positiva» que no se contrapone a la otra, «negativa», practicada en China u otros sitios, sino que constituye su resultado contrafáctico. Mientras los nazis, y todos sus émulos, consumaban el genocidio mediante la destrucción anticipada del nacimiento, el genocidio actual se lleva a cabo mediante el nacimiento forzado, equivalente a la más drástica perversión del acontecimiento que lleva en sí la esencia de la vida, además de su promesa. Contrariamente a quienes vieron en la novedad del nacimiento el presupuesto, simbólico y real, para una acción política renovada, el estupro étnico hizo del nacimiento el punto culminante de la conjunción entre política y muerte —pero todo ello, en la trágica paradoja

de una nueva generación de vida—. Que todas las madres de guerra ruandesas, al dar testimonio acerca de su experiencia, hayan declarado que aman a su hijo nacido del odio, significa que la fuerza de la vida prevalece aún sobre la de la muerte. Significa también que la más extrema práctica inmunitaria —afirmar la superioridad de la sangre propia llegando a imponerla a quien no la comparte— está destinada a volverse contra sí misma, produciendo exactamente lo que quería evitar. Los hijos hutu de las mujeres tutsi, o tutsi de los hombres hutu, son el resultado objetivamente comunitario —esto es, multiétnico— de la más violenta inmunización racial. También desde esta perspectiva estamos frente a una suerte de indecible, un fenómeno de dos caras, en el que la vida y la política se imbrican en un vínculo imposible de interpretar sin un nuevo lenguaje conceptual.